

077/2025

I

El proyecto de Real Decreto objeto del presente informe tiene por finalidad establecer el marco jurídico para la gestión de los residuos generados por las toallitas húmedas de un solo uso y por los globos que contengan plástico y que sean de un solo uso, así como las medidas destinadas a la prevención de la producción de dichos residuos y a la mejora de su gestión, con el objeto de contribuir a la transición hacia una economía circular.

Asimismo, el proyecto desarrolla el régimen de responsabilidad ampliada del productor aplicable a dichos productos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que incorpora al ordenamiento jurídico interno la Directiva (UE) 2019/904, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente.

En concreto, la habilitación para llevar a cabo este desarrollo reglamentario se contiene en la *Disposición final cuarta*, apartado 1 letras b), c) y d) de la Ley 7/2022, de 8 de abril, que faculta al Gobierno para dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación de esta ley y, en particular, para establecer normas en relación con los residuos que generan los diferentes tipos de productos, desarrollando reglamentariamente la responsabilidad ampliada del productor, y estableciendo normas para los residuos, que fijen disposiciones particulares relativas a su producción y gestión:

“Disposición final cuarta. Habilitación para el desarrollo reglamentario.

1. Se faculta al Gobierno para dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación de esta ley y, en particular, para:

(...)

b) Establecer normas para los diferentes tipos de productos en relación con los residuos que generan.

c) Desarrollar reglamentariamente la responsabilidad ampliada del productor.

d) Establecer normas para los residuos, en las que se fijarán disposiciones particulares relativas a su producción y gestión, así como los diferentes tratamientos de residuos y para la identificación de los residuos prevista en el

*artículo 6.1.
(...)”*

Se informa, por tanto, el presente Real Decreto, en el que se desarrollan las previsiones de su Disposición final cuarta, en coherencia con lo dispuesto en sus artículos 58, 60 y 61, referidos respectivamente al régimen de marcado aplicable a determinados productos de plástico de un solo uso, al establecimiento y desarrollo de los regímenes de responsabilidad ampliada del productor, y a las obligaciones de información, concienciación y sensibilización asociadas a dichos productos.

En cuanto a su estructura, el texto normativo objeto de este informe consta de una parte expositiva y otra dispositiva integrada por veintiséis artículos, agrupados en un título preliminar y cuatro títulos numerados, dos disposiciones adicionales, dos transitorias, tres finales y seis anexos. El articulado incluye, entre otros aspectos, las disposiciones generales, la prevención y gestión de residuos, el régimen de responsabilidad ampliada del productor, y las obligaciones de información y sensibilización, así como el control, inspección y régimen sancionador.

Desde una perspectiva general, debe destacarse que el objeto principal del Real Decreto es medioambiental, orientado a la prevención de residuos, la reducción de su impacto ambiental y la mejora de su gestión, así como al establecimiento de obligaciones económicas y organizativas para los productores de determinados productos de plástico de un solo uso.

En este contexto, la incidencia del proyecto en materia de protección de datos de carácter personal es accesorio y de naturaleza instrumental, pues **no constituye una norma reguladora autónoma del tratamiento de datos personales, ni establece un régimen específico en esta materia, sino que prevé únicamente determinados tratamientos de datos como consecuencia del funcionamiento del régimen de responsabilidad ampliada del productor, y, en particular, a través de la regulación y funcionamiento del Registro de Productores de Productos.**

II

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos —RGPD—), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales —LOPDGDD— conforman el marco jurídico de referencia en España que afecta a la protección de datos de carácter personal. En estas normas se regulan los principios y fundamentos a los que deben ajustarse la recogida y tratamiento de los datos personales por cualquier persona pública o privada

que lleve a cabo tratamiento de datos de carácter personal en el ejercicio de su actividad.

Entre otras definiciones, el artículo 4 del RGPD se refiere a **«datos personales»** como *toda información sobre una **persona física identificada o identificable** («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. Y «tratamiento» como cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción.*

Por su parte, el apartado 1 del artículo 2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, establece que: *“Lo dispuesto en los Títulos I a IX y en los artículos 89 a 94 de la presente ley orgánica se aplica a cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.”*

En este contexto, aunque con carácter general los productores de toallitas húmedas y de globos son **personas jurídicas** —no protegidas por el RGPD—, el procedimiento implica la recogida y tratamiento de diverso **tipo de datos de carácter personal** (de personas físicas, ex artículo 4 RGPD), cuyo análisis de necesidad se impone en atención a las exigencias de la normativa de protección de datos. Así, entre otros, los datos personales de los productores que sean personas físicas, y los de las personas físicas que integren o gestionen los sistemas individuales o colectivos de responsabilidad ampliada del productor.

A su vez, debe también considerarse la concurrencia del tratamiento de los denominados *datos de contacto* de las personas físicas que presten servicios en una persona jurídica, en los términos previstos en el artículo 19 de la LOPDGDD, cuando señala:

“Artículo 19. Tratamiento de datos de contacto, de empresarios individuales y de profesionales liberales.

*1. Salvo prueba en contrario, se presumirá amparado en lo dispuesto en el artículo 6.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679 el **tratamiento de los datos de contacto y en su caso los relativos a la función o puesto desempeñado***

de las personas físicas que presten servicios en una persona jurídica siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) **Que el tratamiento se refiera únicamente a los datos necesarios para su localización profesional.**

b) **Que la finalidad del tratamiento sea únicamente mantener relaciones de cualquier índole con la persona jurídica en la que el afectado preste sus servicios.** (La negrita es nuestra)

2. La misma presunción operará para el tratamiento de los datos relativos a los empresarios individuales y a los profesionales liberales, cuando se refieran a ellos únicamente en dicha condición y no se traten para entablar una relación con los mismos como personas físicas.

3. Los responsables o encargados del tratamiento a los que se refiere el artículo 77.1 de esta ley orgánica podrán también tratar los datos mencionados en los dos apartados anteriores cuando ello se derive de una obligación legal o sea necesario para el ejercicio de sus competencias.”

En consecuencia, tanto (i) los datos personales de los productores personas físicas y/o integrantes de sistemas individuales o colectivos de responsabilidad ampliada, como (ii) los de *las personas físicas de contacto y representantes*, que prestan servicio en la persona jurídica (cuyos datos personales son objeto de tratamiento a fin de mantener relaciones de cualquier orden con la sociedad productora en la que prestan sus servicios), se encuentran protegidos por la normativa de protección de datos.

Por tanto, el tratamiento de todos estos datos personales entrará plenamente en el ámbito de aplicación del artículo 2.1 RGPD y de los artículos 1 y 2 de la LOPDGDD. No obstante, debe tenerse en cuenta que el artículo 19 de la LOPDGDD —relativo al tratamiento de datos de contacto de las personas físicas que prestan servicios en una persona jurídica—, resulta únicamente aplicable cuando dichos datos se traten *exclusivamente* para mantener relaciones de cualquier índole con la entidad a la que representan.

III

Para la determinación del responsable del tratamiento de los datos de carácter personal, el artículo 4.7 RGPD, señala que habrá de estarse a su definición, cuando dispone que dicha condición corresponde a *“la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento; (...)”*, y, en su virtud, concretar con carácter general en quién concurre dicha figura.

En este sentido, del análisis del proyecto de Real Decreto se desprende que el **responsable del tratamiento**, en el sentido del artículo 4.7

del RGPD, es el *órgano administrativo competente para la gestión del Registro de Productores de Productos*, registro que, conforme a lo previsto en el artículo 7.2 del Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y por el que se crea el Registro de Productores, se encuentra adscrito a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En consecuencia, para la determinación del responsable del tratamiento de los datos de carácter personal, se atiende a la definición del artículo 4.7 del RGPD, conforme al cual tiene dicha condición la autoridad pública u organismo que determina, solo o junto con otros, **los fines y medios del tratamiento**. Pues bien, del examen del texto sometido a informe se desprende con claridad que la gestión del Registro de Productores de Productos comporta la determinación *tanto de los fines como de los medios del tratamiento*, lo que permite identificar a la citada Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental como responsable del tratamiento.

En el marco de sus competencias legales, corresponde a dicho órgano la recepción y recogida de los datos personales contenidos en las solicitudes de inscripción de los productores de productos y, en su caso, de sus representantes autorizados, así como la información periódica relativa a la puesta en el mercado de toallitas húmedas y globos. Asimismo, le compete el registro, consulta, verificación y utilización de dicha información en el ejercicio de las funciones de control y comprobación del cumplimiento de las obligaciones legalmente exigidas en materia de responsabilidad ampliada del productor.

Igualmente, corresponde al órgano gestor del Registro la asignación del número de registro a cada productor inscrito y la gestión de los efectos jurídicos derivados de dicha inscripción, así como la articulación de los mecanismos necesarios para garantizar la calidad, coherencia y fiabilidad de los datos comunicados, de conformidad con las previsiones del Real Decreto en materia de obligaciones de información y control.

Además, de acuerdo con la *normativa de protección de datos*, corresponderá asimismo al responsable del tratamiento la gestión del acceso a los datos personales tratados, limitándolo al personal debidamente autorizado y garantizando el deber de secreto, mediante la adopción de las medidas técnicas y organizativas apropiadas para preservar la confidencialidad, integridad y seguridad de la información contenida en el Registro de Productores de Productos (ex artículos 5.1.f) y 32 del RGPD).

El tratamiento de los datos personales que se derive del funcionamiento del Registro se encontrará, en todo caso, estrictamente limitado a lo necesario para la gestión administrativa del régimen de

responsabilidad ampliada del productor. En este sentido, el Real Decreto no prevé usos adicionales, ulteriores o incompatibles con dicha finalidad, ni tratamientos ajenos a las funciones legalmente atribuidas al citado Registro (ex artículos 5.1.b) y 5.1.c) del RGPD).

Asimismo, corresponderá al órgano responsable del Registro velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales en todas las fases del tratamiento, asegurando que los datos se traten de conformidad con los principios de licitud, minimización, limitación de la finalidad y del plazo de conservación, e integridad y confidencialidad, y garantizando, en el ámbito de sus competencias, el adecuado ejercicio de los derechos de las personas físicas afectadas (ex artículos 5, y 12 a 22 del RGPD).

En conclusión, como resultado del análisis efectuado y de conformidad con la normativa de protección de datos, corresponderá al órgano competente del Registro de Productores de Productos ordenar y controlar el acceso a los datos personales tratados, restringiéndolo al personal debidamente autorizado y garantizando el deber de secreto respecto del contenido del Registro, mediante la adopción de las medidas técnicas y organizativas necesarias para preservar la confidencialidad y la seguridad de la información.

Asimismo, incumbe al titular del Registro velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos en todas las fases del procedimiento, asegurando que los tratamientos de datos personales se ajusten a los principios de licitud, minimización, limitación de la finalidad y del plazo de conservación, e integridad y confidencialidad, y garantizando, en el ámbito de sus competencias, el adecuado ejercicio de los derechos de las personas afectadas.

IV

La normativa de protección de datos contempla diferentes supuestos que pueden dar lugar al tratamiento de datos de carácter personal. En concreto, de acuerdo con el **artículo 6** –“Licitud del tratamiento”-, del **RGPD**, entre otros, dicho tratamiento es lícito y legítimo cuando:

“1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos;

b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;

c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento; (La negrita es nuestra)

d) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física;

e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento; (La negrita es nuestra)

f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño.

Lo dispuesto en la letra f) del párrafo primero no será de aplicación al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.”

Conforme al articulado de la norma que se informa, las competencias se ejercerán por el responsable del tratamiento, y, en concreto, en lo relativo al Registro de Productores de Productos, por su órgano gestor y por las Administraciones públicas competentes en virtud de las competencias que tienen conferidas por la ley. Dicho Registro se encuadra en el marco de la *gestión pública*, ejerciendo sus competencias de acuerdo con lo establecido en una norma con rango de ley formal, y respondiendo así a las exigencias derivadas del artículo 8 de la LOPDGDD.

En este contexto, la **Ley 7/2022, de 8 de abril**, contiene ya un conjunto sistemático de previsiones relativas a *la existencia, naturaleza y funcionamiento del Registro de Productores de Productos*, así como a los datos y documentos que deben ser objeto de inscripción y comunicación en el mismo, en el marco de las obligaciones legales impuestas a las personas físicas o jurídicas a las que resulta de aplicación el régimen de responsabilidad ampliada del productor. Dichas previsiones se insertan en el diseño general del sistema de información en materia de residuos configurado por la propia ley.

En particular, la citada Ley 7/2022, de 8 de abril, atribuye expresamente a las Administraciones públicas competentes funciones de *control, vigilancia e inspección* vinculadas al cumplimiento de las obligaciones de inscripción e información asociadas al Registro de Productores de Productos. Así se desprende, entre otros, de lo dispuesto en su **artículo 12.3.g)**, que reconoce como competencia administrativa el ejercicio de la potestad de vigilancia, inspección y sanción en relación con dichas obligaciones registrales, lo que evidencia el carácter público del Registro y su integración en el ejercicio de

potestades administrativas legalmente atribuidas.

Asimismo, el **artículo 38** de la Ley 7/2022, de 8 de abril, al regular el cumplimiento de las obligaciones del productor del producto, refuerza la centralidad del Registro de Productores de Productos como instrumento esencial para verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones derivadas de los regímenes de responsabilidad ampliada del productor, configurándolo como un mecanismo básico de información y control en el ámbito de la gestión de residuos:

“Artículo 38. Cumplimiento de las obligaciones del productor del producto.

1. El productor del producto cumplirá con las obligaciones que se establezcan en los regímenes de responsabilidad ampliada del productor de forma individual o de forma colectiva, a través de la constitución de los correspondientes sistemas de responsabilidad ampliada. Al resto de obligaciones de los productores de producto que no sean obligaciones financieras o financieras y organizativas se dará cumplimiento de forma individual.

Los sistemas individuales o colectivos que se constituyan cumplirán con lo establecido en este título, así como con lo dispuesto en su legislación específica y el resto de normas que les resulten aplicables.

*2. En la regulación específica de cada flujo, se creará la sección correspondiente a ese flujo de productos en el Registro de Productores de Productos y conllevará la obligación de inscripción y de remisión periódica de información de los productores de productos en dicha sección, con el objeto de recoger información relativa a los productos introducidos en el mercado nacional por los productores de productos sujetos a la responsabilidad ampliada del productor. La información contenida en tales secciones estará a disposición de las autoridades competentes de las comunidades autónomas a efectos de inspección y control.
(...)”*

Por otra parte, el **artículo 66** de la citada Ley integra el Registro de Productores de Productos en el *Sistema Electrónico de Información de Residuos*, junto con otros registros y repositorios de carácter estatal, lo que pone de manifiesto que dicho Registro no constituye una creación aislada o autónoma, sino un componente estructural del sistema público de información en materia de residuos, *concebido y regulado por una norma con rango de ley formal*.

El carácter obligatorio de la inscripción y del suministro de información al Registro se ve reforzado por el régimen sancionador previsto en la propia Ley 7/2022, de 8 de abril. En este sentido, la **letra ac) de su artículo 108** tipifica como infracción el incumplimiento de las obligaciones de inscripción en el Registro de Productores de Productos, así como de las obligaciones de

información relativas al número de identificación del productor registrado y a la remisión de datos sobre los productos introducidos en el mercado nacional, lo que evidencia nuevamente el respaldo legal expreso de dichas obligaciones.

De este modo, las previsiones fundamentales relativas a la creación, finalidad, funcionamiento y efectos jurídicos del Registro de Productores de Productos, así como a las obligaciones de inscripción e información asociadas al mismo, **se contienen en una norma con rango de ley formal**, en plena coherencia con lo dispuesto en el **artículo 8 de la LOPDGDD**. El Real Decreto objeto de informe se limita, desde esta perspectiva, *a desarrollar y concretar reglamentariamente dichas previsiones legales, sin alterar su contenido esencial*.

En su virtud, las previsiones normativas contenidas en la Ley 7/2022, de 8 de abril, responden a las exigencias derivadas del artículo 8 de la LOPDGDD, cuando dispone que:

“Artículo 8. Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos.

*1. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con **rango de ley**, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679. (La negrita es nuestra)*

*2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con **rango de ley**.” (La negrita es nuestra)*

A su vez, debe recordarse que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y por el que se crea el Registro de Productores, se procede a la *“Creación del Registro de Productores de Productos”*, en los siguientes términos:

“Artículo 7:

1. Se crea el Registro de Productores de Productos, de carácter

administrativo y declarativo, que estará adscrito a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

2. El Registro de Productores de Productos se organiza en secciones de productores y recopilará la información sobre la puesta en el mercado de productos para cumplir con las obligaciones de información en materia de gestión de residuos. El Registro de Productores de Productos contendrá, al menos, la sección de fabricantes de bolsas de plástico.

A través de las correspondientes normas reguladoras de residuos podrán establecerse nuevas secciones del Registro de Productores de Productos con el contenido que éstas determinen.”

En este contexto, desde la perspectiva de protección de datos, el interés del Real Decreto que se informa se centra esencialmente en (i) la inscripción de los productores (personas físicas) y, en su caso, de sus representantes autorizados, en el Registro de Productores de Productos, (ii) en el suministro periódico de información sobre la puesta en el mercado de los productos, y (iii) en las obligaciones de información, control e inspección vinculadas a dicho Registro.

Fuera de este ámbito, desde la perspectiva material, el proyecto no introduce tratamientos adicionales relevantes de datos personales, ni modifica el régimen general aplicable en esta materia. El texto proyectado se limita a desarrollar y concretar diversos aspectos ya previstos en otras normas de **rango legal** y reglamentario, de tal modo que no altera ni desnaturaliza estas previsiones. Así, de acuerdo con sus artículos 10 y 11:

“Artículo 10. Creación de las secciones de productores de toallitas húmedas y de globos en el Registro de Productores de Productos.

*Con el objeto de cumplir con las obligaciones de información en materia de gestión de residuos, y en particular para recopilar información sobre la puesta en el mercado de toallitas húmedas y globos, se crean las secciones de toallitas húmedas (en adelante “sección de productores STH”) y de globos (en adelante “sección de productores SG”) en el Registro de Productores **de Productos, de conformidad con el artículo 7.2 del Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y por el que se crea el Registro de Productores.**” (La negrita es nuestra)*

“Artículo 11. Inscripción en el Registro de Productores de Productos.

1. Los productores de producto o, en su caso, los representantes autorizados, se inscribirán en las secciones de productores STH o SG, según corresponda, en el plazo de tres meses desde la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto.

2. Los productores de producto estarán obligados, en el momento de inscribirse, a facilitar la información contenida en anexo I.A, que deberá ser actualizada cuando se produzca una modificación de la misma.

(...)

3. **La información facilitada tendrá carácter público. Los datos de carácter personal estarán protegidos por la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal.** (La negrita es nuestra)

4. En el momento de la inscripción, se asignará un número de registro que deberá figurar en las facturas.”

En conclusión, la base de legitimación de los tratamientos de datos personales derivados del Real Decreto objeto de análisis se encuentra claramente incardinada en las previsiones del artículo 6.1 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016. En particular, dichos tratamientos resultan necesarios para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, en los términos previstos en la *letra c)* del citado precepto.

Asimismo, dichos tratamientos encuentran cobertura en la *letra e)* del artículo 6.1 del RGPD, al derivar del ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable por una norma con rango de ley. Todo ello se entiende sin perjuicio de la eventual aplicación de lo dispuesto en la *letra f)* del mismo precepto respecto del tratamiento de datos de las “personas de contacto”, en el sentido establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.

Dichas bases se ven reforzadas por lo dispuesto en el artículo 8 de la LOPDGDD, en cuanto los tratamientos derivan directamente de las competencias atribuidas por la Ley 7/2022, de 8 de abril, norma con rango de ley formal que habilita expresamente el desarrollo reglamentario del régimen de responsabilidad ampliada del productor.

V

A su vez, dado que algunas de las previsiones contempladas en el proyecto de Real Decreto implicarán la realización de tratamientos de los datos de carácter personal, dichas actuaciones deben relacionarse con los principios de protección de datos recogidos en el **artículo 5** del Reglamento General de Protección de Datos. A los efectos que aquí interesan, el mencionado artículo 5, en su apartado 1, se refiere a los principios de limitación de la finalidad, minimización y exactitud, limitación del plazo de conservación, e integridad y confidencialidad:

“5.1 Los datos personales serán:

(...)

b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; de acuerdo con el artículo 89, apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales («limitación de la finalidad»);

c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos»);

d) exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan («exactitud»);

e) mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales; los datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que impone el presente Reglamento a fin de proteger los derechos y libertades del interesado («limitación del plazo de conservación»);

f) tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas («integridad y confidencialidad»)."

En este sentido, según se observa, desde la perspectiva de dichos principios del artículo 5 del RGPD, el proyecto de Real Decreto presenta un impacto proporcionado en materia de protección de datos, en la medida en que los datos personales se recogen con fines determinados, explícitos y legítimos, vinculados al cumplimiento de obligaciones legales, limitándose el tratamiento a los datos adecuados, pertinentes y necesarios para la gestión del Registro de Productores de Productos, respetándose el principio de limitación del plazo de conservación, al no preverse usos indefinidos ni ajenos a la finalidad legal.

En este sentido, el proyecto no introduce riesgos específicos adicionales para los derechos y libertades de las personas físicas, ni configura tratamientos de especial complejidad o intensidad, por lo que no puede apreciarse un impacto relevante o sustantivo en materia de protección de datos personales, que justifique la adopción de medidas extraordinarias.

A la vista de todo lo expuesto, el proyecto de Real Decreto presenta un impacto limitado, accesorio y estrictamente funcional en materia de protección de datos de carácter personal, circunscrito a la regulación y funcionamiento del Registro de Productores de Productos y a las obligaciones de información asociadas al régimen de responsabilidad ampliada del productor.

Además, según se viene manteniendo, los tratamientos de datos personales que derivan del proyecto se encuentran debidamente amparados en una norma con rango de ley, y se ajustan a las bases de legitimación previstas en el RGPD, respetando los principios generales del tratamiento de datos personales.

VI

En relación con la *“Inscripción en el Registro de Productores de Productos”*, el artículo 11.3 del proyecto de Real Decreto —transcrito *ut supra*—, dispone que *“la información facilitada tendrá carácter público. Los datos de carácter personal estarán protegidos por la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal”*.

No obstante, dicha previsión, aun siendo relevante, resulta insuficiente desde el punto de vista de la normativa de protección de datos personales, en la medida en que no contienen una referencia expresa y sistemática al régimen jurídico aplicable a los tratamientos de los datos personales realizados en relación con el funcionamiento del citado Registro.

Por ello, se considera necesario incorporar un precepto específico o, en su caso, una disposición adicional en la que se establezca de forma expresa que el tratamiento de los datos personales que se derive de la aplicación del Real Decreto se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y en la restante normativa vigente en materia de protección de datos personales, con una cláusula que podría adoptar la siguiente redacción u otra similar:

“Las actuaciones reguladas en este Real Decreto se llevará a cabo con el debido cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), y de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como en el resto de normativa aplicable a la materia.

Asimismo, los tratamientos de datos personales efectuados al amparo de este Real Decreto se ajustarán a los principios relativos al tratamiento establecidos en el artículo 5 del RGPD, en particular a los de licitud, lealtad, transparencia, limitación de la finalidad, minimización de datos, exactitud, limitación del plazo de conservación e integridad y confidencialidad. De igual modo, el responsable del tratamiento de datos adoptará las medidas técnicas y organizativas apropiadas previstas en el artículo 32 del RGPD para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental.”